



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-010-2015-01746-01 (O2-22-053)
Demandante: HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN
Demandada: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS DE MÉXICO S.A.S., INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A. Y COLPENSIONES E.I.C.E.
Procedencia: JUZGADO DÉCIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No.171 DEL 16 DE AGOSTO DE 2022
Asunto: TÍTULO PENSIONAL Y PENSIÓN DE VEJEZ

En Medellín, a los dieciséis (16) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-010-2015-01746-01 (O2-22-053), promovido por **HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN** contra **COLPENSIONES E.I.C.E.**, e **INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS DE MÉXICO S.A.S.**, y en el que se integró el contradictorio con **INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A.**, con el fin de resolver el Recurso de Apelación interpuesto por **HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN**, contra la sentencia que selló la primera instancia proferida el 15 de febrero de 2022 por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, "Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones", se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

La señora HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN, actuando por intermedio de apoderada judicial, promovió demanda ordinaria laboral contra COLPENSIONES E.I.C.E. e INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MÉXICO S.A.S. en procura de obtener el reconocimiento de la pensión de vejez en aplicación del régimen de transición pensional, liquidándola con el promedio salarial de los últimos 10 años, y el pago de las mesadas comunes y adicionales causadas desde el 02 de diciembre de 2011, junto con los intereses de mora y la indexación, y las costas del proceso.

Como fundamento fáctico expuso que nació el 02 de diciembre de 1951, cumpliendo 60 años de edad el mismo día y mes del año 2011, que es beneficiario del régimen de transición pensional, que según consta en certificación expedida por CONSTRUCTORA MENDES JUNIOR S.A., laboró para dicha empresa entre el 15 de febrero de 1977 y el 3 de septiembre de 1978 con un salario básico de \$ 140 pesos diarios; que trabajó en el proyecto hidroeléctrico de Jaguaz desde el 15 de octubre de 1979 hasta el 3 de abril de 1988 con un salario de \$ 1.175 pesos diarios; solicitó la corrección de su historia laboral ante Colpensiones el día 13 de diciembre de 2013, sin embargo se le entregó la historia laboral actualizada con el faltante de los tiempos laborados con anterioridad al 16 de diciembre de 1988, indicando que los entes societarios para las que trabajó no trasladaron los aportes que realizó a COLPENSIONES, siendo los mismos fundamentales para el reconocimiento de su pensión. Narra el demandante que cumplió los requisitos para obtener pensión de vejez el 2 de diciembre de 2011, pues en tal data arribó a la edad de 60 años, que inició trámite de reconocimiento de la pensión de vejez el 02 de julio de 2014, la cual le fue negada mediante la resolución GNR 200980 del 6 de julio de 2015

1.1. Trámite de Primera Instancia

La demanda se admitió el 15 de diciembre de 2015 (carp.01, sub carp.01, doc. 01, pág. 57 a 58) y se notificó a COLPENSIONES E.I.C.E. el 12 de enero de 2016 (carp.01, sub carp.01, doc. 01, pág. 59), y a INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS DE MÉXICO S.A.S., el 11 de febrero de 2016 (carp.01, sub carp.01, doc. 01, pág. 82).

COLPENSIONES E.I.C.E. presentó contestación el 03 de febrero de 2016 (carp.01, sub carp.01, doc. 01, pág. 60 a 65), en la cual aceptó la edad del demandante, negó los hechos relativos al derecho del actor a la pensión de vejez y manifestó no constarle los relativos a la vinculación laboral con las codemandadas o los consorcios mencionados;

consecuentemente se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de fondo que denominó: inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de vejez, improcedencia de los intereses de mora, improcedencia de la indexación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación.

INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MEXICO S.A.S. presentó contestación el 24 de febrero de 2016 (carp.01, sub carp.01, doc. 01, pág. 93 a 101), en la que manifestó no tener nada que ver con la sociedad INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A., misma que fue la que integró el CONSORCIO "ICA – GRANDICON", razón por la cual niega toda relación laboral con el demandante, indicando que como sociedad solo se constituyó a partir del 02 de diciembre de 1991; expresa que en las fechas alegadas de la vinculación laboral no existía cubrimiento del ISS y por ello los empleadores del demandante no tenían obligación de afiliarlo. Como postura defensiva, se opone a todas las pretensiones en su contra y propone como medios exceptivos los de prescripción, la inexistencia de la obligación de pagar pensión de vejez e intereses moratorios y ausencia del derecho sustantivo.

De otra parte, se advierte que, en audiencia del 06 de diciembre de 2018 (carp.01, sub carp.01, doc. 01, pág. 151), se ordenó la integración del contradictorio con INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS S.A., la cual presentó contestación el día 24 de abril de 2019 (carp.01, sub carp.01, doc. 01, pág. 163 a 170), en la que expresa que en efecto el consorcio "ICA-GRANDICON" fue integrado por INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A. Y GRANDICON LTDA, precisando que sus instalaciones físicas se inundaron perdiendo gran cantidad de su información y la de sus trabajadores o de los consorcios de los cuales fue parte, razón por la cual no tiene información de salarios o del personal que laboró en el "CONSORCIO ICA-GRANDICON". Aduce no conocer los hechos relativos a la empresa Constructora Mendes Junior S.A., que para los periodos reclamados por el demandante no existía cobertura del ISS en los municipios de San Carlos y San Rafael. Se opone a las pretensiones y formula como excepciones las que individuó prescripción, inexistencia de la obligación de pagar pensión de vejez e intereses moratorios y ausencia del derecho sustantivo.

1.2. Sentencia de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 15 de febrero de 2022 (carp.01, sub carp.01, doc. 09, 10 y 11) por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia en la que declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación respecto de INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MÉXICO S.A.S. e INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A.; y la de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER LA PENSIÓN DE

VEJEZ, respecto de COLPENSIONES; absolvió a las demandadas de las pretensiones formuladas por la señora HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN, gravando a este último en costas en favor de las demandadas.

Para sustentar su decisión, la cognoscente de primer grado argumentó que el actor no logró demostrar la relación laboral con el consorcio ICA- GRANDICON y por tanto no se puede predicar responsabilidad de INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A., por acreencias laborales de dicho consorcio; en igual sentido, manifiesta que el demandante no acredita los requisitos para ser beneficiario de la pensión de vejez bajo los parámetros del régimen de transición pensional.

1.3. Recurso de Apelación

La decisión antes descrita fue objeto del recurso de alzada por el procurador judicial de HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN (min. 24:25, carp.01, doc. 11), en orden a que se revoque la sentencia de primera instancia, pues se le dio una valoración errada al interrogatorio de parte, pretendiendo que el demandante recordara fechas y nombres exactos, cuando los hechos ocurrieron hace más de 35 años, con el argumentó que erró el despacho al no acoger las pretensiones cuando obraban las certificaciones y si bien no se apoyaron en la prueba testimonial, ello no se hizo, en tanto no era posible traer al juicio a testigos, dada la fecha en que ocurrieron los hechos.

Por su parte, la vocera judicial de COLPENSIONES E.I.C.E., como el poderhabiente de las sociedades demandadas no hicieron uso de la oportunidad para confutar la sentencia de primera instancia, guardando silencio.

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación se admitió el 21 de febrero de 2022 (carp.02, doc. 02), y mediante proveído del día 28 del mismo mes y año (carp.02, doc. 03), se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo del caso.

COLPENSIONES E.I.C.E., alegó el 04 de marzo de 2022 (carp.02, doc. 04), aseverando que el demandante no logró acreditar los supuestos de hecho y derecho para el reconocimiento de la pensión de vejez, ni la prestación del servicio por los periodos comprendidos entre el 15 de octubre de 1979 y el 03 de abril de 1998, por lo que tales tiempos no pueden ser reflejados en

su historia laboral. Esgrime que no es suficiente que el trabajador haya laborado para que los tiempos se incorporen a la historia laboral, que es necesario que también se realice el pago de los aportes correspondientes, por lo cual solicita sea confirmada la sentencia de primera instancia.

Por su parte, el poderhabiente de INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A. e INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MEXICO S.A.S., presentó alegaciones el 14 de marzo de 2022, mediante las cuales expresó que la juez de primera instancia, de forma acertada absolvió a las empresas demandas de las pretensiones incoadas con la demanda, pues en el interrogatorio de parte, el demandante manifestó que la certificación con la que sustentaba la relación laboral fue expedida por un compañero del almacén, sin lograr dar cuenta del nombre de su compañero o del cargo que este desempeñaba, enfatizando que no puede darse por probada la relación laboral principalmente porque no proviene de un representante del empleador; igualmente señala que la empresa INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MEXICO S.A.S. se constituyó en diciembre de 1991, motivo por el cual no puede fungir como empleadora del demandante durante el lapso del 15 de diciembre de 1979 al 3 de abril de 1988.

Por último, la apoderada judicial del señor HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN, se abstuvo de presentar alegatos de conclusión.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN, advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problemas Jurídicos

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a determinar si el señor HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN acredita de manera fehaciente la prestación de sus servicios en favor de CONSTRUCCIONES DE MÉXICO S.A.S. E INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A., y por consiguiente, si le asiste el derecho a que dichas sociedades le reconozcan y paguen el consabido título pensional por los tiempos que alega prestó dicho servicio, sin cotizaciones al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, con antelación a que la afiliación

fuera obligatoria, y si hay lugar, al reconocimiento de la pensión de vejez a cargo de COLPENSIONES E.I.C.E..

2.2. Sentido del Fallo

La Sala confirmará la decisión de primer grado, en cuanto absolvió a las demandadas de las pretensiones incoadas por la señora HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN, en tanto las pruebas arrimadas al plenario no dan cuenta de la efectiva prestación personal de sus servicios en favor de los entes societarios enunciados, y por tanto, no se logra habilitar la presunción de subordinación laboral y consecuente relación laboral; de suerte que, no hay lugar al pago de título pensional como no se logran acreditar los requisitos para acceder a la pensión de vejez por parte del actor.

2.3. Solución de los Problemas Jurídicos Planteados

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, la Sala avizora que no existe discusión sobre los siguientes supuestos fácticos relevantes del proceso: que el señor HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN nació el 02 de diciembre de 1951 (carp.01, sub carp.01, doc. 01, pág. 25 y 28), que se afilió y efectuó cotizaciones al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a partir del 16 de diciembre de 1988 (carp.01, sub carp.01, doc. 01, pág. 29 a 36), y que solicitó la pensión de

vejez a COLPENSIONES, misma que le fue negada mediante la resolución GNR 200980 del 06 de julio de 2015 (carp.01, sub carp.01, doc. 01, pág. 37 a 42).

2.3.1. El Contrato de Trabajo

El derecho al trabajo ha sido reconocido en nuestro ordenamiento jurídico como un valor esencial del Estado Social de Derecho, y por ello en el Preámbulo y los artículos 1º, 2º, 25, 39, 48, 55, 56 y 64 de la Constitución Política y el legislador se ocuparon de brindarle una atención especial, reconociéndolo como aquel que le asiste a toda persona para pretender y obtener un trabajo en condiciones dignas, no solo como un mecanismo para asegurar el mínimo vital y nivel de vida digna, sino también como un requisito esencial para la concreción de la libertad, la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad.

El contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona natural, denominada trabajador, se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, denominada empleador, bajo su continuada dependencia o subordinación, servicio por el cual recibe una remuneración (artículo 22 del CST). Para que se dé una relación de trabajo protegida por la legislación laboral, debe concurrir una tríada de requisitos esenciales, cuales son: (i) que la actividad desplegada por el trabajador sea personal, es decir, realizada por sí mismo; (ii) una continua subordinación o dependencia del trabajador, la que faculta al empleador para imponerle reglamentos y exigirle el cumplimiento de órdenes en tiempo, modo, calidad y lugar, y (iii) la retribución del servicio, mediante el pago del salario convenido por las partes (artículo 23 del CST).

Reunidos aquellos elementos, se presume que existe un contrato de trabajo, y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se estipulen (artículo 24 del CST), y por consiguiente, al trabajador solo le basta demostrar la ejecución personal de un servicio, para que opere en su favor la presunción de la existencia de un vínculo laboral (CSJ SL del 29-11-1958; SL del 05-05-1982, radicado 8247; SL del 27-06-2000, radicado 14096; SL del 17-05-2011, radicado 38182; SL-10546 del 06-08-2014, radicado 41839; SL-15507 del 11-11-2015, radicado 45068; SL-16528 del 26-10-2016, radicado 46704; SL-6621 del 03-05-2017, SL-781 del 14-03-2018, radicado 47852; radicado 65768; SL-4444 del 16-10-2019, radicado 58413; SL-577 del 12-02-2020, radicado 68636; SL-3126 del 19-05-2021, radicado 68162; SL 3847 del 25-08-2021, radicado 79919), evidenciándose que en el asunto que ocupa la atención de la Sala, la sociedad demandada INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MÉXICO S.A.S., niega haber sido empleadora del señor HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN durante los periodos comprendidos entre el 15 de octubre de 1979 a 03 de abril de 1988, en razón de

no haber formado parte del "CONSORCIO ICA – GRANDICON", siendo que este ente societario nació a la vida jurídica en diciembre de 1991 (carp.01, doc. 08). Por su parte, la sociedad INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A., acepta haber formado parte del "CONSORCIO ICA – GRANDICON", negando la relación laboral con el demandante, más aún si en una inundación de sus oficinas perdió toda la documentación referente a sus empleados y consorcios de los que formó parte, por lo que ambas sociedades desconocen la prestación de servicios personales por el demandante HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN.

A propósito de zanjar este aspecto de la controversia, la Sala observa que en la audiencia que tuvo lugar el 15 de febrero de 2022, la señora HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN (desde el minuto 22:45, carp.01, doc. 10) sostuvo que laboró para ICA DE MÉXICO en San Carlos, que el consorcio para el cual laboró fue ICA DE MÉXICO Y GRANDICON, que no sabe qué empresas lo conformaron, pero fueron contratados por ISA, que no recuerda cómo se llamaba el proyecto, pero cree que se llamaba hidroeléctrica de San Carlos; que no recuerda el nombre del jefe de personal porque eso fue hace muchos años, que el sueldo se lo pagaban personalmente ICA DE MÉXICO, que concluyó su vinculación por terminación de la obra, que todo el tiempo trabajó como electricista liniero, que no recuerda las fechas en las que trabajó; que cree que entró el 15 de enero de 1979 pero no recuerda cuando salió, tampoco recuerda el salario que devengaba. Añade, igualmente, que tiene en la casa pruebas de cartas de despido, fotos y "mucha evidencia del trabajo", que la certificación de tiempo de servicios se la que expidió un señor mexicano que trabajaba en el almacén de la empresa, que incluso en dicha certificación le faltó un año y tres meses de tiempo de trabajo; que cree que él estaba autorizado para entregarle dicha carta, pero no recuerda su nombre ni nada más y que no recuerda la fecha de entrada y salida a la CONSTRUCTORA MENDES JUNIR S.A., y que no firmó contrato con ICA DE MÉXICO Y GRANDICON, aunque trabajó nueve años y tres meses con ellos.

Ahora bien, de la declaración de parte recabada, esto es, la rendida por el señor HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN, no se logra inferir que el mismo hubiere prestado sus servicios personales subordinados en favor de las sociedades demandadas, sin que se logre dar cuenta de los extremos temporales de la relación laboral alegada, ya que indica que comenzó a laborar para el "CONSORCIO ICA- GRANDICON" el 15 de enero de 1979, afirmación que no es congruente con la certificación aportada (carp.01, sub carp.01, doc. 01, pág. 23), en tanto que esta última señala como extremo inicial de la relación laboral el 15 de octubre de 1979; así mismo el demandante expresa no recordar hasta que fecha prestó sus servicios, amén de no recordar el nombre del jefe de personal o a través de quien le efectuaban los pagos de

los salarios por él devengados, e indicar que la referida certificación laboral fue expedida por un compañero que trabajaba en Almacén, de quien tampoco recuerda el nombre.

El señor IÑAKI IBARRECHE HARFUSH, en calidad de representante legal de la empresa INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MÉXICO S.A.S, en interrogatorio de parte que absolviera el 15 de febrero de 2022 (desde el minuto 15:45, carp.01, doc. 10), expresó que la sociedad que representa ha realizado proyectos de ingeniería en Colombia tales como mantenimiento de oleoductos y carreteras en Bogotá, que no tiene relación comercial con la codemandada INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A., aserciones de las que no se puede extraer confesión alguna frente a la relación laboral alegada por el demandante entre el 15 de octubre de 1979 y el 03 de abril de 1998.

Consecuentemente, la certificación laboral aportada con la demanda (carp.01, sub carp.01, doc. 01, pág. 23) no tiene la fuerza probatoria suficiente para que se dé por probada la prestación personal del servicio, y por ende, el demandante debió apoyar su relato en otros medios demostrativos como las fotos, cartas de terminación de la relación laboral y demás documentales mencionadas en el interrogatorio de parte, probaturas que conservaba en su poder, o incluso, con prueba testifical que diera cuenta de la relación laboral y sus extremos temporales.

Ello así, la Sala advierte que la relación laboral con el CONSORCIO "ICA- GRANDICON" y la consecuente prestación personal del servicio en el proyecto Hidroeléctrico de Jaguaz, no fue acreditada por el demandante, por lo cual no se puede radicar en cabeza de las sociedades demandadas INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MÉXICO S.A.S e INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A., la obligación de pagar el título pensional por el periodo comprendido entre el 15 de octubre de 1979 y el 03 de abril de 1988, máxime cuando no se logró demostrar que la sociedad INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MÉXICO S.A.S, hubiera formado parte de tal consorcio.

2.3.2. LA PENSIÓN DE VEJEZ

2.3.2.1. La causación de la pensión de vejez: Los afiliados al régimen de prima media con prestación definida que pretendan acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, deben acreditar, desde el año 2014, una edad mínima de 57 años, las mujeres, o de 62 años, los hombres, y desde el año 2015, una densidad cotizacional igual o superior a 1.300 semanas (artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003); sin embargo, los afiliados que para el 01 de abril de 1994, contaban con 15 años de servicios, 750

semanas cotizadas, o 35 años, de ser mujeres, o 40 años, de ser hombres, podían pensionarse con el número de semanas y el monto o tasa de reemplazo descritos en el régimen anterior (artículo 36 de la Ley 100 de 1993), régimen transicional que solo se extendió hasta el 31 de julio de 2010, salvo para los beneficiarios de dicho régimen, que al 29 de julio de 2005 hubieren cotizado 750 semanas, o su equivalente en tiempo de servicios, para quienes el régimen de transición se mantuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año 2014 (parágrafo transitorio 4º del Acto Legislativo 001 de 2005).

Sobre el particular, se advierte que en el *sub iudice* se encuentra plenamente acreditado que, para el 01 de abril de 1994, el señor HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN contaba con 42 años de edad, puesto que nació el 02 de diciembre de 1951 (carp.01, sub carp.01, doc. 01, pág. 25 y 28), y había cotizado 153,67 semanas, es decir, 1.075,69 días (carp.01, sub carp.01, sub carp.03), y que para el 31 de julio de 2010, tenía 58 años de edad y 529,15 semanas cotizadas; así las cosas, si bien el demandante en principio fue beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1994, debe indicar la Sala que no conservó dicho régimen en tanto no acreditó con anterioridad al 31 de julio de 2010, tener 60 años de edad, y 500 semanas de cotización durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, o 1.000 semanas en cualquier tiempo (artículo 12 del Decreto 758 de 1990); ni acreditó 750 semanas de cotización al 29 de julio de 2005, para que se le extendiera el beneficio de la transición pensional hasta el 31 de diciembre de 2014, según lo dispuesto en el parágrafo transitorio 4º del Acto Legislativo 001 de 2005.

Ello así, para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, el actor tendría que acreditar los requisitos previstos en artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, es decir 62 años de edad y 1.300 semanas de cotización, probándose que a la fecha cuenta con 70 años de edad y 887,86 semanas de cotización, según la última historia laboral aportada al plenario (carp.01, sub carp.01, sub carp.03), no acreditándose, por tanto, la causación del derecho al reconocimiento de la pensión de vejez, tal y como lo estimó la *a quo*.

Colofón de todo lo anterior, se impone para la Sala impartir confirmación a la sentencia de primer grado, en cuanto declaró no probadas las excepciones de inexistencia de las obligaciones de pagar título pensional y reconocer pensión de vejez.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 365 del CGP, las costas de la segunda instancia estarán a cargo del señor HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN, por habersele resuelto desfavorablemente el recurso de apelación propuesto, y con arreglo a lo previsto en el Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan como agencias en derecho, a favor de COLPENSIONES E.I.C.E., INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MÉXICO S.A.S. e INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A., la suma de \$1.000.000, que corresponde a un (1) SMMLV, siendo el límite mínimo permitido, suma que deberá cancelar en proporción a una tercera parte para cada una de las codemandadas.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

5. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida 15 de febrero de 2022, por el JUZGADO DÉCIMO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por el señor HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN contra COLPENSIONES E.I.C.E., INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MÉXICO S.A.S. e INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo del señor HERNANDO DE JESÚS MURILLO RINCÓN, fijándose como agencias en derecho la suma de \$1.000.000, equivalente a un (1) SMMLV y a favor de COLPENSIONES E.I.C.E., INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MÉXICO S.A.S. e INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S.A., en proporción a una tercera parte de esa suma para cada una de las precitadas co-demandadas.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogándose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL 2550 de fecha 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

(sin firma por ausencia justificada)
JULIO RAFAEL TRODECILLA PAYARES
Magistrado



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas, corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Única de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario